

Chile ha sido, desde la década de los noventa, el ejemplo de desarrollo para Iberoamérica. Sus niveles de crecimiento ininterrumpido durante más de dos décadas, su implacable lucha contra la pobreza y su capacidad para abrir líneas de comunicación y firmar tratados de libre comercio a lo largo y ancho del mundo han servido de inspiración para gran parte de la sociedad hispanoamericana.

Todo eso cambió en el año 2019, cuando, fruto de una subida de tarifas -ridícula para algunos- en el sistema de transporte público, se inició un periodo de protestas que puso contra las cuerdas al ejecutivo liderado por Sebastián Piñera, abriendo una etapa de reforma constitucional y de inestabilidad política sin precedentes en la historia democrática del país. En el año 2021, la situación generada abrió la puerta a un gobierno de izquierdas encabezado por Gabriel Boric, líder estudiantil reconvertido a político y, en la actualidad, presidente de la nación.

Sin embargo, el proyecto de Constitución promovido desde la izquierda no se ganó ni el corazón ni la razón de los chilenos. Este fue rechazado en septiembre del pasado año, lanzando un jarro de agua fría a esa izquierda que deseaba cambios radicales en el modelo institucional existente en el país. El modelo que en su momento presentó la Asamblea Constituyente conllevaba un giro de 180 grados, imponiendo a la sociedad chilena una Carta Magna indigenista y afín a los postulados de la izquierda más radical existente en la región.

El pasado domingo, y con objeto de reabrir el debate constitucional, tuvo lugar una nueva elección para la conformación de la Asamblea Constituyente. Fue ahí donde las fuerzas liberal-conservadoras han obtenido unos resultados apabullantes, los cuales muestran de forma clara el deseo de Chile de cambiar, pero no bajo la propuesta que había cocinado la izquierda.

El Partido Republicano liderado por José Antonio Kast ha logrado el 35.5% de los votos válidos emitidos. El apoyo total a las fuerzas de derecha asciende al 56.5%. Las fuerzas de izquierda y de centro obtuvieron el 37.5%, casi veinte puntos menos. Son unos resultados históricos que señalan, como hemos indicado, que Chile desea cambiar, pero no a cualquier precio. La nueva constitución no puede ser un instrumento de la izquierda, una herramienta que sirva para dividir al país y fomentar el desarrollo desde arriba de tendencias extremistas e indigenistas. El nuevo proyecto debe fortalecer aquello que en su momento ha contribuido al desarrollo del país andino: el compromiso con la protección de la estructura de derechos y libertades de las personas, la defensa de la igualdad jurídica de todos los chilenos ante la ley, el blindaje de la propiedad privada -esa que ha sido maltratada durante las protestas que han tenido lugar en el país-, y una apuesta firme por la división de poderes y la calidad institucional.

Los resultados no han gustado a la izquierda. Con toda seguridad, esos que se dicen demócratas intentarán tomar las calles y, de nuevo, generar inestabilidad y caos en el país, otrora ejemplo de solidez institucional y prosperidad. Esta vez no se puede caer en la trampa y rendirse ante unos manifestantes violentos que no representan el sentir generalizado de la sociedad chilena. Dicho esto, y a pesar de este cambio de rumbo, Chile sigue navegando en la crisis y en la incertidumbre. El país debe retomar el sendero del desarrollo y del progreso con ánimo de seguir incluyendo a más y más gente en la clase media. Ojalá el mensaje enviado por la población sea tenido en cuenta por los nuevos asambleístas. Ojalá, Chile siga siendo lo que era, ese país andino que se esforzaba día a día por ganar la batalla a la pobreza y mejorar la vida de los suyos. Chile tiene que seguir siendo lo que fue, el ejemplo de desarrollo iberoamericano, la nación que es capaz de decir *'sí, se puede'*.